

**CERTIFICO:** Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso revocando el abogado **don Gonzalo Bravo Valenzuela** y el abogado **don Pablo Durán Urrutia**, confirmando. Santiago, 24 de marzo de 2022.

**Carolina Morales Ramírez**  
**Relator**

C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

Proveyendo los escritos folios 69, 71 y 72, a todo, téngase presente.

**Vistos y teniendo presente:**

**PRIMERO:** Que comparece don **DAVID NICOLÁS ANCELOVICI SURHCKE**, abogado, en representación de **INVERSIONES NEFESH LIMITADA**, del giro de su razón social, ambos domiciliados en ambos con domicilio para estos efectos en Avenida El Golf N° 150, piso 4, Las Condes, ciudad de Santiago, quien interpone reclamo de ilegalidad según lo previsto en la letra d) del artículo 151 de la ley N°18.695, en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, por el acto administrativo ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respecto del reclamo de ilegalidad deducido en contra del Oficio N° 1962, de fecha 22 de abril del año 2020, en virtud del cual se rechazó la solicitud planteada por el reclamante respecto de la devolución de los montos pagados por concepto de patente comercial municipal ascendientes a \$12.375.896.-.

Funda su pretensión señalando que el 17 de febrero de 2020 solicitó la devolución de los montos pagados por concepto de patente municipal durante los años 2017 y 2018, por un total de \$12.375.896.-, puesto que siendo una sociedad por acciones, cuyo giro único y exclusivo desde su constitución es la obtención de rentas pasivas, y derivando la totalidad de sus ingresos durante el período señalado, única y exclusivamente de la rentabilidad de inversiones en que participa como socio o accionista, su actividad no está gravada con el tributo



señalado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del D.L. 3.063, sobre Rentas Municipales.

Explica que la solicitud fue respondida por la Ilustre Municipalidad de Providencia a través del Oficio referido, limitándose a rechazarla en base a argumentos formales y nominales que tornan incomprensible su decisión, a saber, *“que el contribuyente realiza una actividad gravada con patente municipal de acuerdo al artículo 23 referido en relación al artículo 24 del mismo estatuto legal”*. Contra dicho acto administrativo, el reclamante dedujo reclamo de ilegalidad municipal ante la Alcaldesa de la Municipalidad aludida, transcurriendo más de 15 días hábiles administrativos sin que se emitiera decisión por dicho órgano, certificándose dicha circunstancia, omisión que, a su juicio, y según la regulación del silencio administrativo, deviene en confirmar lo resuelto a través de mentado Oficio.

Sostiene que el actuar de la Municipalidad carece de fundamentos de hecho y de derecho, tornándolo ilegal, al vulnerar el deber de motivación consagrado en los artículos 11, 16 y 41 de la ley N°19.880 y en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de Chile, y en cuanto al fondo, infringe el principio de legalidad tributaria consagrado en los artículos 19 N° 20 y 63 N°14 de la Carta Fundamental, al extender el ámbito de aplicación del artículo 23 del D.L. 3063, sobre Rentas Municipales a la actividad del reclamante, toda vez que lo gravado por la contribución de patente comercial municipal es el ejercicio efectivo de las actividades lucrativas secundarias y terciarias, así como las actividades primarias o extractivas en los casos de explotación en que medie algún proceso de elaboración de productos, lo que no se da en la especie. Asimismo, refiere que implica una vulneración a la garantía constitucional de propiedad del contribuyente, al retener dineros injusta e ilegalmente cobrados e indebidamente pagados.

Finalmente, aclara que no ha buscado justificar su solicitud de devolución de fondos pagados por patentes comerciales en la reforma introducida por la ley N°21.210, toda vez que los fundamentos de ésta obedecen a la interpretación del artículo 23 referido, en conformidad a



su texto previo a la reforma y que ha sido interpretado recientemente por la Corte Suprema.

**SEGUNDO:** Evacuando el traslado, don **Gonzalo Hernán Vallejo Geiger**, abogado, en representación de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad interpuesto, con costas, atendida la manifiesta falta de fundamento.

Manifiesta que el reclamo de ilegalidad interpuesto es improcedente para resolver la materia discutida, toda vez que se trata una acción de naturaleza contencioso administrativa dirigida a enderezar las actuaciones ilegales del Alcalde o los funcionarios de su dependencia en el ejercicio de sus funciones y competencias legales, lo que no se advierte, debiendo el asunto ser resuelto en sede ordinaria, dada su naturaleza litigiosa civil.

Indica que el cobro de patente municipal al reclamante se encuentra ajustado a derecho, de conformidad a las normas contenidas en los artículos 23, 24 y 26 del D.L. N° 3063/79, ya que de su tenor literal resulta clarísimo el sentido de que cualquier actividad de carácter lucrativo, esto es, que produzca utilidad y ganancia, desarrollada por un contribuyente en los sectores económicos secundario o terciario, permiten al municipio cobrar el tributo en cuestión, y en la especie, el contribuyente ejerció una actividad lucrativa a partir del mes de julio del año 2009 y hasta diciembre del año 2018, amparado por la patente que solicitó a dicho Municipio, fijando su domicilio en calle Fresia N°638, Providencia, y desde que solicitó su patente municipal y hasta su eliminación, nunca puso en duda su obligación de pago de este impuesto.

Argumenta que la interpretación de la sociedad contribuyente es errada, toda vez que se estableció en sus estatutos un objeto social de carácter amplio, comprendido dentro de lo señalado en la letra c) del artículo 2° del D.S. N°484 de 1980 del Ministerio del Interior, es decir, corresponde a una actividad terciaria, la que se encuentra sujeta a la obligación de pago de patente municipal por el desarrollo de actividades lucrativas. Asimismo, refiere que las exenciones al impuesto municipal



están en el artículo 27 del estatuto legal mencionado, dentro de las cuales no se contempla a la sociedad reclamante, dado que se trata de una persona jurídica con fines de lucro, que no desarrolla alguna de las actividades allí excepcionadas, quedando en consecuencia gravada con el tributo, según lo previsto en los artículos 23 y 24 del D.L. 3063, interpretación que ha sido clarificada con la historia legislativa y jurisprudencial de dichas normas, la que cita.

A continuación, arguye que la Municipalidad, tanto al rechazar en forma ficta el reclamo de ilegalidad interpuesto en sede administrativa, como al emitir el Oficio N° 1962, actuó con estricto apego a lo dispuesto en la Ley N° 19.880, en los artículos 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales y en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Como consecuencia de ello, afirma que no ha infringido los principios de imparcialidad, transparencia y probidad y el deber de motivación regulados en la Ley de Bases, ni el principio de legalidad tributario consagrado en la Carta Fundamental. Asimismo, no se ha vulnerado de ningún modo la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de Chile, considerando que a la fecha de emisión del Oficio reclamado, existía un acto administrativo válidamente emitido mediante el cual se emitió la Patente Comercial Rol Número 2-99462 a la sociedad reclamante.

Aclara que los Dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República en la materia establecen expresamente que, conforme a lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, si las acciones previstas en el objeto social de la sociedad incorporan, contienen, describen o permiten la realización de actividades lucrativas, configuran éstas hechos gravados de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.

En relación a la ley N°21.210, expresa que el artículo trigésimo primero de la misma no agregó un nuevo hecho gravado, sino que su objetivo fue zanjar definitivamente la discusión existente entre la jurisprudencia emanada de la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema durante los últimos 10 años y aquella emanada de la Primera



Sala a partir de septiembre del año 2019, sobre si las sociedades de inversión pasivas están afectas al pago de patente municipal.

En subsidio, opone excepción de prescripción de la patente municipal correspondiente a la cuota del segundo semestre del año 2017, pagada el 6 de julio de ese año por la suma de \$4.200.052.-, la que funda en el artículo 2.521 del Código Civil, dado que a la fecha de notificación del libelo el 30 de septiembre de 2020, el plazo de tres años contemplado en dicha norma se había cumplido largamente.

**TERCERO:** Que evacúa el informe requerido la Fiscal Judicial señora **CLARA CARRASCO ANDONIE**, esclareciendo que la cuestión debatida consiste en la obligación que tendría la Municipalidad de Providencia de devolver los montos pagados por la reclamante por concepto de patente municipal en los períodos indicados, en virtud de que la actividad de la reclamante no está gravada con patente municipal. Estima que la Municipalidad no ha cometido ilegalidad alguna, ya que el acto reclamado ha sido dictado por la autoridad competente dentro del ámbito de sus facultades, y teniendo presente además que la recurrente fue la que pagó, sin cuestionar el tributo en su oportunidad, siendo su objeto social amplio, lo que debe considerarse para la procedencia de la alegación.

A mayor abundamiento, indica que la devolución de lo pagado supuestamente indebido, es un asunto que debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento en el cual ambas partes hagan valer las acciones y excepciones que estimen pertinentes, no correspondiendo, por lo tanto, tampoco en esta sede pronunciarse sobre una posible prescripción de las acciones de la reclamante.

En consecuencia, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad intentado por no haber cometido ilegalidad alguna la autoridad edilicia al dictar el Oficio N° 1.962 de 22 de abril de 2020, y además, por no ser el reclamo de ilegalidad la vía idónea para resolver sobre la devolución pedida.

**CUARTO:** Que la jurisprudencia ha definido a las sociedades de inversión pasiva como aquellas cuyo objeto social y giro es la inversión



de todo tipo de bienes, percibiendo ingresos por rentabilidad de esas inversiones y no por actividades comerciales, sin proyección al público ni prestando servicios por los que cobre una comisión. (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de agosto de 2011, Rol N° 1092-11).

En el caso de la especie, según consta de los antecedentes acompañados a la causa, el reclamante presentó con fecha 17 de febrero de 2020 solicitud de devolución de lo pagado por concepto de patente comercial durante el año 2017 a 2018, fundado en que su giro corresponde única y exclusivamente a la obtención de rentas pasivas, cuyo origen es la adquisición de bienes con fines rentísticos que no involucran la producción de bienes ni la prestación de servicios.

**QUINTO:** Que en primer lugar es del caso anotar que el contribuyente -actor en esta acción- pagó, sin objeciones, la patente de que se trata, desde el año 2009 y hasta que requirió su eliminación el año 2018, de modo que conforme a su propia y voluntaria actuación se colocó en la situación de pago contra la que ahora reclama, razón por la cual mal puede ahora desconocer su actuar aduciendo que la sociedad no realiza actividad gravada. Por consiguiente, en cuanto al fondo, no se divisa la ilegalidad atribuida al rechazo contra el que se reclama, bajo ninguna de las argumentaciones invocadas por la sociedad reclamante.

En efecto, su conducta, según se advierte de los antecedentes, contraviene la denominada teoría de los actos propios, principio general del derecho fundado en la buena fe que impone el deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada por la conducta del mismo sujeto, lo que en este caso se verifica, toda vez que, sin considerar la modificación legal introducida al artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, por la Ley N° 21.210, la reclamante, al pagar el tributo, asumió como legítima y ajustada a derecho la interpretación normativa conforme a la cual la actividad comercial realizada por la sociedad estaba gravada con el mismo, aceptando tácitamente dicha interpretación.

**SEXTO:** Que la existencia de diversas interpretaciones jurídicas sobre las normas aplicables a la materia lo reconoce el legislador en el



artículo cuadragésimo séptimo transitorio de la Ley N° 21.210 al disponer que: “La modificación al artículo 23 del decreto ley N° 3.063 de 1979 que contempla el artículo trigésimo primero de la presente ley, regirá a partir del 1° de julio de 2020. Esta modificación al hecho gravado tiene por único objeto dar certeza jurídica, a partir de la entrada en vigencia, sobre la legítima diferencia de la interpretación del mencionado artículo en su texto vigente hasta el 30 de junio de 2020. De esta forma, respecto de la contribución de patente municipal devengada en periodos anteriores a la vigencia de esta modificación, regirá el texto vigente hasta esa fecha. En consecuencia, no podrá fundarse en esta modificación legal la solicitud de devolución o cobro de contribuciones de patente municipal, respecto de periodos anteriores a la vigencia de la modificación que contempla la presente ley ni afectará procedimientos administrativos ni jurisdiccionales en curso o que se promuevan en forma posterior de dichos periodos”.

En la historia de la Ley N° 21.210, Informe de la Comisión de Hacienda en Segundo Trámite Constitucional en el Senado de 13 de enero de 2020, en el punto 4, sobre MAYOR RECAUDACIÓN PROGESIVA, se dice “III. Patente Municipal de Sociedades de Inversión: Regularización de la patente municipal a sociedades de inversión (sin afectar situaciones pasadas ni juicios pendientes o en tramitación”.

En consecuencia, siendo legítima la interpretación dada al citado artículo 23 en los periodos reclamados, por reconocerlo expresamente el legislador en la transcrita disposición transitoria, no se advierte vicio de ilegalidad que justifique la devolución de lo pagado por contribución de patente comercial, sobre todo si se tiene presente que ha sido la reclamante quien pagó las cuotas demandadas de los años 2017 y 2018 que ahora reclama. Por otro lado, la Municipalidad de Providencia en el ámbito de su competencia dio cumplimiento a lo previsto en el Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, asumiendo un criterio interpretativo que por lo demás había sido ratificado por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia en esos años, sin que una



posición jurídica diferente sea suficiente para configurar el vicio ahora alegado.

**SÉPTIMO:** Que atendida la naturaleza de la acción intentada, la que tiene por objeto revisar la legalidad de los actos administrativos de la autoridad municipal, ha de concluirse que el actuar de la municipalidad al cobrar y percibir el pago de patente comercial correspondiente a los años 2017 a 2018 se ajustó a derecho.

**OCTAVO:** Que por lo razonado se comparte el dictamen del Ministerio Público Judicial.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 23 y 24 del Decreto Ley N. 3063, de 1979, y sus modificaciones, **SE RECHAZA** el reclamo de ilegalidad deducido por don **DAVID NICOLÁS ANCELOVICI SURHCKE**, en representación de **INVERSIONES NEFESH LIMITADA**, en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Contencioso Administrativo-400-2020.





Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Jaime Balmaceda E. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

